



Un grupo de estudiantes de la Complutense escuchó clase ayer en el Museo del Aire Libre en protesta por los recortes en educación. / ÁLVARO GARCÍA

La Complutense saca a la calle el descontento de las universidades

Un centenar de docentes dan clase en plazas madrileñas ● La profundidad de los recortes deja sin capacidad de reacción a los campus públicos

J. A. AUNIÓN / PILAR ÁLVAREZ
Madrid

Más de 100 profesores de la Complutense de Madrid protestaron ayer contra los recortes que ahogan a las universidades sacando sus clases a la calle. Centenares de alumnos les siguieron, a pesar del frío, desperdigados por el centro. El campus presencial más grande de España, y uno de los que sufre más los ajustes, daba visibilidad así a un descontento que atraviesa las universidades públicas de toda España, por los recortes económicos y por la subida de tasas, que afectan directamente a los alumnos.

La cuenta del ahogo es sencilla, aunque los montos exactos sean todavía inciertos: las universidades públicas no consiguen reducir sus gastos a la misma velocidad que desde las Administraciones recortan sus ingresos. Básicamente, porque para hacerlo no es suficiente con reducir al máximo los gastos corrientes o adelgazar la nómina de profesores a tiempo parcial, sino que tendrían que empezar a despedir a docentes funcionarios, explica el catedrático de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros. Y esos despidos no son posibles y, probablemente, tampoco deseables en un momento en el que la matrícula está creciendo: el curso pasado había cerca de 70.000 alumnos más en las universidades públicas que en 2008-2009.

Algunos ejemplos del ahogo están en Cataluña, donde los campus acumulan un déficit de 238

millones; y en la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde los Gobiernos autónomos deben a sus universidades 600 millones y 700 millones, respectivamente. Ni todas las comunidades están ajustando igual ni todos los campus tienen números rojos, pero el futuro es bastante negro para todos: los recortes serán en 2013 de varios cientos de millones en toda España a sumar a los más de 800 perdidos en los últimos tres años.

En Madrid, las universidades públicas disponen de 863 millo-

nes para 2013. Han perdido 165 millones en los últimos presupuestos que la Comunidad de Madrid espera que recuperen con la subida de tasas. El dinero para inversiones (obras y edificios nuevos) ha caído más del 90% desde 2008, cuando el Gobierno regional dinamitó un acuerdo a cinco años por 640 millones que había suscrito con sus seis campus públicos.

"Intentamos cambiar nuestra propia mentalidad, presionar a la Comunidad de Madrid y mostrar

a la gente cuál es nuestro trabajo", explica Juan Varela, profesor de Filología Italiana y miembro de la coordinadora que ha organizado la jornada de protesta. Varela puso el germen hace un mes con una clase al raso sobre Dante Alighieri; antes del verano, habían hecho lo mismo un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide en la capital andaluza. De hecho, desde que los alumnos y profesores catalanes abrieran la espita de la protesta en noviembre de 2011, han

"No tenemos ni para fotocopias"

P. Á. / P. M. / M. C., Madrid

La Puerta del Sol es un aula. La plaza de Ópera, una sala de baile. La de España, un laboratorio de veterinaria. Madrid se convirtió ayer en un gran campus al aire libre, porque la universidad se siente desnuda. "Estamos en condiciones muy familiares: con frío, ruido, igual que en las aulas", decía en Sol Antonio de Cabo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Disertó sobre el proceso constituyente de 1978 frente a unos 50 alumnos sentados sobre cartones. Más de un centenar de profesores impartieron clase en sus horas libres al raso.

"No queremos que sea una cosa folclórica, pretendemos una

interpelación a la clase política", explicaba el profesor de Filología Italiana Juan Varela, uno de los organizadores de la iniciativa #lacompluenlacalle. Al inicio de cada clase, un alumno leía el manifiesto consensuado para denunciar el "estrangulamiento económico" de las universidades, la subida de tasas o la inestabilidad de las plantillas.

"El cambio que vivimos no nos asimila a Harvard, sino a los años sesenta del siglo pasado", reflexiona Germán Garrido, profesor de Filología Alemana. "Llevo 10 años empleando mi energía y ahora me encuentro con el desprecio". Es interino. Gana unos 900 euros al mes. Fernando Ángel Moreno, de Teoría de la Literatura Comparada, tiene 178 alumnos matriculados en una de

sus asignaturas. Cobra 1.300 euros como profesor ayudante.

"Deberíamos estar pensando en cómo llevar la universidad al futuro y no en cómo conseguir folios o fotocopias", se queja José Manuel Lucía, catedrático de Filología Románica, que ayer se sintió juglar contando en Ópera los secretos de *El Quijote*. En la Cuesta de Moyano, Florentino Moreno ambientó su lección *La aplicabilidad de la Psicología al cine* con la música de *La vida es bella*: "En 20 años de docencia nunca había visto un deterioro tan grande". En Moncloa, el ruido del tráfico ahogaba la voz de la profesora Luísa Posada en su clase sobre el Pensamiento Crítico Feminista: "Llevamos el problema a la calle porque la universidad está casi en la calle".

seguido todo tipo de acciones en toda España.

Los recortes universitarios empezaron a llegar (como en todos los sectores) en el curso 2009-2010, justo cuando el alumnado repuntaba y cuando se suponía que los campus debían hacer un esfuerzo extra para adaptarse al nuevo modelo común europeo (proceso de Bolonia), que requería, entre otras cosas, atención personalizada con grupos más pequeños de alumnos; algo probablemente inviable hoy.

Desde entonces, los campus han ido aprobando planes de ajuste tratando de reducir al máximo los gastos en infraestructura y en el día a día, desde la luz y la limpie-

En tres años, 800 millones de euros menos para 70.000 alumnos más

Los centros tratan de reducir al máximo los gastos corrientes

za hasta el material de oficina, los años sabáticos o el dinero para congresos, llegando incluso a cerrar instalaciones en vacaciones, como han hecho, entre otras, las universidades de Oviedo o Málaga.

En la Comunidad Valenciana, las cinco universidades públicas están al borde del colapso financiero. La Generalitat les abona las transferencias para gastos corrientes tarde y mal, unos meses a una le pagan en efectivo, mediante transferencia bancaria, y al resto mediante *confirming*, una especie de aval con el que los gerentes piden en un banco un crédito para pagar nóminas.

A los recortes desde las Administraciones y los retrasos en los pagos se añade la inestabilidad presupuestaria. "Estamos francamente angustiados", reconoce Adelaida de la Calle, rectora de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). "Trabajamos con presupuestos virtuales", afirma De la Calle, que pone como ejemplo su universidad. En la matriculación no han notado mucho el impacto de los incrementos de los precios públicos: tienen el mismo número de alumnos, aunque los chicos se han apuntado a menos asignaturas. Pero ya se está gestando otro problema. De la Calle sostiene que en su centro se han duplicado este año las peticiones de becas al ministerio. "A muchos de estos posibles becarios no les concederán las ayudas y entonces se desmatricularán de créditos y tendremos menos ingresos de lo previsto", apunta la presidenta de la CRUE.

A esa situación hay que sumar los desencuentros de los rectores con el ministro de Educación nombrado por el PP, José Ignacio Wert, que llegó al cargo con un discurso muy duro y crítico hacia las universidades. El desencuentro culminó con un insólito plantón de los rectores al ministro en el Consejo de Universidades de mayo. La razón fue que Wert se negó a discutir el decreto que

La reacción a los recortes sociales

sociedad

acababa de aprobar para reducir el gasto educativo en 3.900 millones entre 2012 y 2013, en torno a la mitad de los cuales son de la universidad. Los rectores no llegaron a poner en cuestión la magnitud del hachazo, sino más bien los errores técnicos de los cálculos ministeriales (aunque sí rechazaron firmemente el endurecimiento de las condiciones para obtener becas).

El ministerio piensa ahorrar unos 2.000 millones de euros poniendo más horas de clase a los docentes que investiguen menos, reduciendo el número de titulaciones con pocos alumnos, limitando la incorporación de nuevos profesores, obligando a las universidades a cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria y, sobre todo, aumentando el precio de las matrículas universitarias, medida con la cual pensaban ahorrar más de 1.700 millones.

Pero estas dos últimas medidas presentan varios problemas. Primero, el cálculo de ahorro, pues cada comunidad ha hecho de su capa un sayo: las hay que han congelado el precio de las primeras matrículas (como Asturias y Galicia) y las hay que las han subido hasta los 400 euros (Madrid y Castilla y León) o de 600 a 900 euros en Cataluña; para los repetidores, los precios se han disparado en la inmensa mayoría. Además, las Administraciones van a dejar de dar esos 1.700 millones a las universidades, contando con que los recuperarán a través del aumento de las tasas, pero esto no está asegurado, porque es muy posible que los alumnos reajusten el número de asignaturas de las que se matriculan para no gastar tanto. Con lo cual, los campus tendrían ahí otro agujero

En la Comunidad Valenciana hay cinco campus al borde del colapso financiero

“Trabajamos con presupuestos virtuales”, denuncia Adelaida de la Calle

en su financiación justo cuando el Estado les obliga a cumplir con el principio de estabilidad.

En Cataluña, la caída de los ingresos y la lentitud de los planes de ajustes han disparado el déficit de los siete campus públicos hasta los 238 millones. Desde 2009, la aportación a las universidades se ha reducido en 168 millones, pasando de los 901 millones de 2009 a los 747 actuales.

En Andalucía, las 10 universidades públicas tuvieron que recortar a finales del curso pasado 130 millones de sus presupuestos. Paralelamente, los rectores han presionado a la Administración autónoma para que salde la deuda de 700 millones que la Junta mantiene de 2011. La Junta ha empezado a desbloquear fondos para los campus, aunque todavía no se ha fijado un calendario de pagos.

Con información de I. Vallespín, M. Planelles y E. Moltó.

Los médicos madrileños mantienen el pulso con una huelga indefinida

Una asamblea decide continuar hasta que el Gobierno retire el plan privatizador

ELENA G. SEVILLANO
Madrid

Los médicos madrileños siguen dando la batalla contra el plan sanitario del Gobierno regional, que prevé privatizaciones y recortes. Después de una huelga total convocada de forma unánime por todos los sindicatos, tanto de clase como profesionales, y una marcha multitudinaria el martes por el centro de la capital, ahora son los facultativos en solitario quienes mantienen el pulso a Ignacio González con una huelga indefinida en hospitales y centros de salud. La Consejería de Sanidad reconoció ayer un seguimiento del 36,3% en el turno de mañana. Los convocantes, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), calculaban un 85%. Una asamblea en el

Colegio de Médicos —unas 600 personas dentro y mínimo otras 300 que no cabían, en la calle, la mayoría con sus batas blancas— decidió continuar la huelga hasta conseguir la retirada del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del sistema sanitario, anunciado el 31 de octubre junto con el Presupuesto para 2013.

Los usuarios siguieron encontrando ayer consultas vacías en los centros de salud y los hospitales. En algunos ambulatorios todos los médicos hicieron huelga menos los que estaban de servicios mínimos. En otros, el seguimiento descendió con respecto a los dos días de huelga de todo el sector. En el hospital Infanta Cristina de Parla, uno de los seis cuya gestión se va a privatizar, de una plantilla de 188 médicos, 63 estuvieron de mínimos y 79 hicieron

huelga, según detalló a este diario un facultativo del centro.

Los sindicatos médicos Amyts y SIME apoyan la convocatoria de Afem, que está consiguiendo muchas adhesiones entre los médicos residentes, por ejemplo, los del hospital infantil Niño Jesús. Las urgencias de este centro se vieron desbordadas el primer día de huelga, cuando los servicios mínimos resultaron insuficientes para atender a todos los pacientes. Si normalmente hay tres adjuntos y cinco residentes, ese día el hospital había puesto de servicios mínimos a cuatro adjuntos. Enseguida se formaron esperas de seis horas, explica un médico del centro. El jefe de guardia —ese día, un cirujano, es un cargo rotatorio— dimitió y delegó en otra persona. Una portavoz del centro aseguró que a to-

dos los pacientes se les hizo una primera valoración en los 30 primeros minutos, aunque después tardaran hasta seis horas en ser atendidos.

La Consejería de Sanidad ordenó el martes retirar las pancartas de la *mareta blanca* en las que se mencionara el pago por la asistencia sanitaria —por inducir “a error” a los pacientes, dijeron—. Ayer, sin embargo, en algunos hospitales se retiraron todos los carteles.

Durante los paros continúan las acciones de protesta. Ayer unos 300 médicos bailaron una coreografía frente al hospital 12 de Octubre. Hoy se concentrarán en la plaza de Cibeles a las 18.00 para después marchar hasta el Ministerio de Sanidad y entregar una carta a su titular, Ana Mato.



Los sanitarios del hospital 12 de Octubre de Madrid hicieron ayer una coreografía para protestar por la privatización de la sanidad pública. / ULY MARTÍN

Nueve autonomías aplican la exclusión sanitaria de los sin papeles sin paliativos

JAIME PRATS, Valencia

Tres meses después de la entrada en vigor de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria normalizada, la medida se aplica de forma muy desigual, según un informe que hizo público ayer Médicos del Mundo.

Nueve Gobiernos autónomos están ejecutando sin paliativos la norma que cierra el paso a la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin permiso de residencia —solo tienen acceso a las urgencias, la atención a los menores y a las embarazadas—. Se trata de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Al-

gunas de estas regiones incluso “van más allá del Real Decreto 16/2012 en materia de vulneración de derechos”, por ejemplo, “otorgando al personal administrativo en lugar de al sanitario la

potestad de decidir lo que es o no una urgencia”.

Existe otro grupo de autonomías que, sin dejar de cumplir con la retirada de la tarjeta, han desarrollado soluciones adminis-

trativas para permitir la atención sanitaria de las personas afectadas por encima de los mínimos que fija la ley, por ejemplo, facturando la asistencia pero no cobrándola. Es el caso de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra. Un tercer grupo integrado por las autonomías objetoras —Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi— no la aplica en su territorio.

Más allá de esta diversidad, Médicos del Mundo también ha constatado que existe un desconcierto generalizado en cómo poner en práctica la medida. Y esta circunstancia no solo afecta al personal sanitario y administrativo de los distintos sistemas de salud. También a los usuarios.

Pacientes al margen del sistema

► **Fátima** es marroquí y está en situación irregular. Fue operada de un cáncer de mama en Castilla-La Mancha y tratada con quimioterapia. En la actualidad, al carecer de cobertura, no sigue ningún control médico, según Médicos del Mundo.

► **Mercedes** vive en Canarias, tiene diabetes, es cubana y no tiene tarjeta sanitaria. En su primera visita al centro de salud tras quedarse embarazada no fue atendida. Después del parto, el hospital se negó a darle la medicación que necesita. Gracias a la intermediación de la entidad humanitaria, rectificó.